



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

Medellín, 12 de mayo de 2023

Radicado: 05001 31 05-005-2019-00198-01
Demandante: ANA DELIA GARCÍA DE VILLA
Demandado: COLPENSIONES y MUNICIPIO DE LIBORINA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA
Tema: RELACIÓN LABORAL Y PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE

La Sala Sexta de decisión, presidida por la magistrada ponente LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia; decisión que se emite en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 13 de la ley 2213 de 2022.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

ANTECEDENTES

Señaló la accionante que su esposo, Humberto Villa García laboró para el Municipio de Liborina entre los años 1992 a 2004, entidad territorial que no realizó afiliación al sistema pensional y por ende no existen aportes, por tanto, con ocasión del fallecimiento de aquel, ocurrido el 26 de abril de 2004 reclama de tal entidad ora la pensión de sobrevivientes, ora del pago del cálculo actuarial para que sea Colpensiones quien conceda la misma prestación.

Como respuesta a la acción ***El Municipio de Liborina*** negó la existencia de una relación laboral con Humberto Villa en los extremos pretendidos, empero adosó los formularios de afiliación al extinto ISS y a la EPS de febrero de 1996 y diciembre de 1995 respectivamente, al igual que una certificación de la prestación de servicios en calidad de obrero entre el 22 de junio de 1992 al 21 de junio de 1998, y posterior vinculación bajo la modalidad de orden de trabajo entre el 27 de julio de 1998 al 9 de febrero de 2001 y entre el 3 de diciembre de 2003 al 15 de febrero de 2004

A su turno ***Colpensiones*** manifestó ser ajena a la relación laboral que se predica, exponiendo que no hay lugar al reconocimiento pensional a cargo de esta entidad en tanto el causante Humberto Villa no dejó causada la prestación al no acopiar la densidad de cotización que exige la Ley 797 de 2003.

En sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado 5° laboral del Circuito de Medellín el 31 de mayo de 2021, el fallador estableció que el causante Villa García prestó servicios para el Municipio de Liborina en una modalidad laboral en tanto las labores encargadas obedecían a funciones misionales de la entidad por tanto no podían contratarse bajo órdenes de servicios o contratos de naturaleza civil.

Así las cosas, era menester realizar cotizaciones al sistema pensional, y dada su omisión corresponde al empleador satisfacer el cálculo actuarial. Luego atendiendo a las pruebas acopiadas, en particular la certificación del ente territorial, estableció que los periodos a compensar corresponden a los corridos entre el 22 de junio de 1992 al 2 de septiembre de 2001 y entre el 3 de diciembre de 2003 al 15 de febrero de 2004, no así de forma ininterrumpida como lo pretende la activa por cuanto tal premisa solo se sustentó en los dichos de los testigos, que correspondían a los hijos de la accionante, quienes no presenciaron la prestación del servicio y asumían que la subordinación era ejercida por el Municipio accionado.

Bajo este cúmulo de cotizaciones que habrán de ingresar a Colpensiones producto del cálculo actuarial, estableció que al fallecimiento Humberto Villa García no fueron satisfechos los presupuestos para la causación de la pensión de sobrevivientes, al

no acopiarse 50 semanas en los 3 años previos al fallecimiento (artículo 9° Ley 797 de 2003), ni aquellos establecidos en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, en tanto en el año previo al deceso no se acumularon 26 semanas de cotización.

En suma, estableció el deber del Municipio de Liborina al pago del cálculo actuarial por los ciclos antes expuestos, pero absolvió en lo referente al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, sin imponer costas procesales a la accionante.

Inconforme con la decisión fue **recurrida por la activa** insistiendo en la procedencia de las pretensiones, ya que en su sentir con la prueba recaudada se establece que el causante Humberto Villa García laboró para el Municipio de Liborina de forma ininterrumpida entre los años 1998 a 2004, sin que en su sentir exista explicación en la cesación de la prestación del servicio entre los años 2001 a 2003 al no demostrarse que otra persona cumplió la función de aseo en el Corregimiento de San Diego del Municipio de Liborina, debiéndose suponer que fue Humberto Villa quien continuó ejerciendo la labor. Bajo esta premisa habrá lugar al reconocimiento pensional, ya sea a cargo del Municipio de Liborina o por parte de Colpensiones.

ALEGATOS

Concedido el término que establece el artículo 13 de la ley 1322 de 2022 la activa presentó escrito donde reitera los argumentos de impugnación señalando que de cara a los elementos de prueba se demuestra la continuidad de la relación laboral entre los años 1992 a 2004.

CONSIDERACIONES

Atendiendo a los elementos de prueba adosados al trámite y los aspectos no controvertidos en este caso se encuentran por fuera de discusión que **1)** El Municipio de Liborina certificó que Humberto Villa García prestó servicios para este ente territorial, en calidad de obrero entre el 22 de junio de 1992 al 21 de junio de 1998 y

bajo la modalidad de “órdenes de trabajo” a partir del 27 de julio de 1998 al 2 de septiembre de 2001 (salvo algunas y breves interrupciones) y luego entre el 3 de diciembre de 2003 al 15 de febrero de 2004 (salvo 2 días de interrupción) – Pág 37 expediente digitalizado; **2)** que Humberto Villa García y Ana Delia García contrajeron matrimonio católico el 30 de enero de 1971 (pág. 29 expediente digitalizado), **3)** Que Humberto de Jesús Villa García falleció el 26 de abril de 2004 (pág 27 expediente digitalizado).

.En ese orden de ideas, de conformidad con los reparos expuestos por el recurrente y revisada la decisión en el grado de consulta, corresponde a esta corporación determinar: **1)** existencia de un vínculo de naturaleza laboral entre Humberto Villa García y el Municipio de Liborina, y sus consecuencias para efectos del cubrimiento de las contingencias del sistema pensional y **2)** procedencia de la pensión de sobrevivientes

EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN LABORAL

En el presente evento y dada la naturaleza jurídica de la entidad que se señala como empleadora habrá de remitirse a los artículos 1 y 2 Decreto 2127 de 1945 que refieren que para que exista un contrato de trabajo, se requieren tres elementos: la prestación personal del servicio, la subordinación y el salario. Y de acuerdo con el artículo 3 ibídem, probada la prestación personal del servicio, carga esta de la parte demandante, nace la presunción de existencia de un contrato de trabajo, al margen de la denominación que se le dé o las condiciones de remuneración.

Luego, atendiendo a los elementos de defensa del presente trámite, donde la pasiva sostiene que la relación de las partes a partir del mes de julio de 1998 se formalizó a través de contratos de naturaleza civil, conviene indicar que de manera reiterada la jurisprudencia de la Corte ha establecido que el elemento diferenciador entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios es la subordinación del trabajador

respecto del empleador, entendida como la posibilidad que tiene el empleador de ejercer control y vigilancia sobre las labores del trabajador, imponiendo órdenes que deben ser cumplidas por el subordinado; en contraste el contrato de prestación de servicios se caracteriza por la independencia o autonomía que tiene el contratista para ejecutar la labor convenida con el contratante. Siendo entonces la subordinación el elemento diferenciador, su prueba está a cargo de aquel que niega la existencia de la relación laboral.

Bajo estas premisas se descende al **caso concreto**, donde no se discute la existencia de la relación laboral entre el 22 de junio de 1992 al 21 de junio de 1998, concluye esta corporación el mismo vínculo se extendió hasta el 2 de septiembre de 2001 y se reanudó el 3 de diciembre de 2003 hasta el 15 de febrero de 2004 sin que el Municipio accionado **derruyera la presunción** de existencia de una relación laboral, a través de la demostración de una relación exenta de subordinación.

Fue así que el Municipio se limitó a valerse de las respuestas a los derechos de petición adiadas del 21 de diciembre de 2005 (pág 41/43) y aquella del 7 de mayo de 2018 (pág. 51/54) que exponen que, a partir del 21 de junio de 1998 Humberto Villa prestó un servicio para el Municipio identificándolo como “órdenes de trabajo”. Empero, tal afirmación no superó el plano formal, sin demostrar para el ciudadano autonomía en la satisfacción de las labores contratadas, la suscripción de los contratos posteriores a aquel del 26 de julio de 1996 (pág 33/35), la forma como se ejercía la auditoría al cumplimiento de las funciones, por tanto, huérfana de prueba quedó tal defensa, condición suficiente para establecer la predicada relación laboral.

Ahora, contrario a lo indicado por el recurrente, los extremos del vínculo laboral deben ser probados, sin que operen presunciones de prestación de servicio bajo la premisa de “no haberse demostrado que alguien más ejercía la labor de barrido del pueblo y limpieza de los tanques de agua”.

Al respecto vale recordar el sistema de cargas probatorias que opera en tratándose de la prueba de una relación laboral (artículos 1, 2 y 3 Decreto 2127 de 1945) donde

corresponde al interesado probar la prestación del servicio para que surja la presunción de existencia de un contrato laboral.

Se trata entonces de la satisfacción suficiente del deber probatorio, que no corresponde trasladarlo a la parte contraria como erradamente lo señala la activa, sino que debe cumplirse de forma que no quede duda que en unos extremos determinados o determinables hubo una prestación personal de un servicio en favor de aquel que se reputa como empleador.,

Carga que no se cumplió respecto al lapso del 3 de septiembre de 2001 al 2 de diciembre de 2003 (que no está comprendido en la certificación laboral pág 37) en tanto las declaraciones de Olga Rubiela, Alba Mery y Fabio Nelson Villa García carecieron de la firmeza suficiente, no solo en razón de la duda de su espontaneidad al tratarse de los hijos de la declarante y que por tanto tienen un interés directo en el resultado del trámite, pero además porque los declarantes aclararon que el conocimiento que tuvieron de los hechos fue parcial, ora por lo que su señor padre les narraba (testigos de oídas), ora por lo que percibieron en las ocasiones que visitaron a sus padres ya que no residían en el mismo lugar, por tanto no pudieron tener un contacto directo con los hechos declarados.

La prueba omitida es de gran relevancia en tanto estructura la consecuencia jurídica pretendida, sin que pueda ser suplida por una afirmación del apoderado de la parte (quien ningún conocimiento directo tuvo de los hechos), aunado a que la certificación del Municipio del 19 de abril de 2002 expedida aun en vida del accionante (pág 39), refiere a la delegación de la función a una acción comunal, lo que abre un espectro de posibilidades de prestación del servicio en favor de una persona diferente al ente municipal accionado, con una gana de condiciones de temporalidad y subordinación indefinidas, que no fueron discutidas, ni probadas de forma que pueda concluirse que Humberto Villa García en el interregno cuestionado prestó la función que alega para el Municipio de Liborina.

Así las cosas, esta corporación avala las conclusiones del fallador de instancia referente a los extremos de existencia de una relación laboral a saber entre el 22 de junio de 1992 al 2 de septiembre de 2001 y entre el 3 de diciembre de 2003 al 15 de febrero de 2004.

CÁLCULO ACTUARIAL A FALTA DE AFILIACIÓN

Respecto de la consecuencia de la existencia de una relación laboral de cara al sistema de seguridad social, concluyó el fallador de instancia que correspondía al Municipio asumir las cotizaciones de los ciclos omisos a través de un cálculo actuarial, conclusión que válidamente puede sustentarse desde el literal f del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 que permite que el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en el sistema pensional tenga como sustento, además de las cotizaciones el tiempo de servicio como servidores públicos.

Empero, en un escenario de reclamación de pensión de sobrevivientes por muerte del trabajador a quien no se le afilió al sistema pensional, ni fueron satisfechas las cotizaciones, el deber del empleador no se suple a través del pago de un cálculo actuarial trasladado a la administradora de pensiones para que esta asuma las eventuales prestaciones, por cuanto no es posible subrogarse en una contingencia ya consolidada.

En este sentido el criterio pacífico de la Sala de Casación Laboral de la CSJ refleja que, si el empleador deja de afiliarse al trabajador y pagar los aportes al Sistema General de Pensiones, sin que convalide dicha omisión antes de la activación del riesgo asegurado, asume el cubrimiento de las prestaciones que se hubieren causado, al respecto al sentencia SL 510 de 2013 que a su vez se remite las provincias SL 3619 de 2022, y SL 4107 de 2017 la que indica:

“Es por ello que, en tratándose de una prestación definida en función del aseguramiento del riesgo, como la pensión de sobrevivientes, para la Corte resulta trascendental que, antes de asumir las prestaciones correspondientes a la realización del riesgo, las entidades de seguridad social hubieran contado con la

posibilidad de gestionarlo, lo que solo se logra con la afiliación oportuna del trabajador o, en subsidio, con algún trámite de convalidación de los tiempos servidos, pero con antelación a que se concrete el riesgo.

Lo contrario equivaldría a imponer una carga desproporcionada en contra de las entidades de seguridad social, que tendrían que asumir el pago completo de una pensión de sobrevivientes, por la convalidación de un tiempo mínimo e indeterminado de servicios y sin poder adoptar medidas para la gestión adecuada del riesgo, por la falta de afiliación. Así, por ejemplo, si se admitiera irrestrictamente que, ante la falta de afiliación, las administradoras de pensiones son las encargadas del pago de la pensión, se llegaría a la conclusión de que el Instituto de Seguros Sociales, como administradora del régimen de prima media, debe asumir el pago de una pensión respecto de la cual: i) no tuvo conocimiento para iniciar acciones de cobro de los aportes; ii) no pudo prever y gestionar el riesgo de sobrevivientes, a través de reservas o seguros; iii) y tiene que financiar en un 100%, aun si los aportes que puede convalidar a través de título pensional no alcanzan para ello.

Con arreglo a lo anterior, para la Corte, en el caso específico de las pensiones de sobrevivientes, la subrogación del riesgo pensional en el Instituto de Seguros Sociales, por la vía de la convalidación de tiempos servidos y no cotizados, a través de cálculo actuarial, solo resulta admisible si dicho procedimiento es realizado en su integridad, antes de que se produzca el riesgo que da origen a la prestación, vale decir, la muerte. Si ello es así, la entidad de seguridad social puede asumir y gestionar válidamente el riesgo, a través de los mecanismos y recursos establecidos legalmente para ello, mientras que, si se admitiera esa posibilidad una vez causado el riesgo, se podría dar lugar a que la entidad tenga que financiar una pensión completa, tras el pago de escasos recursos por tiempos indeterminados de servicios.

Como corolario de lo dicho, si el empleador omiso en la afiliación no realiza el trámite de convalidación de tiempos servidos, antes de la causación del riesgo de muerte, debe asumir el pago de la pensión de sobrevivientes reclamada, en aplicación de disposiciones como el artículo 8 del Decreto 1642 de 1995 y sentencias de esta Sala como la CSJ SL, 9 sep. 2009, rad. 35211. De esta orientación deben excluirse, eso sí, los casos en los que se ha realizado la afiliación del trabajador y la administradora de pensiones incumple las gestiones de cobro, que han recibido otro tratamiento en la jurisprudencia (Ver CSJ SL, 22 jul. 2008, rad. 34270, reiterada, entre otras, en las CSJ SL, 17 may. 2011, rad. 38622, CSJ SL, 13 feb. 2013, rad. 43839, y CSJ SL, 15 may. 2013, rad. 41802).

Premisas que aplicadas al caso concreto llevan a una conclusión disímil a la del fallador de instancia en tanto, dada la causación de la contingencia que ampararía el sistema pensional, no es posible expiar la omisión a través de la satisfacción de un cálculo actuarial, lo que de forma cierta trae consecuencias adversas para el sistema pensional, haciéndolo responsable de un beneficio económico en favor de los beneficiarios de un ciudadano que nunca fue su afiliado, que nunca aportó al sistema

y a cambio de la recepción de una suma de dinero que eventualmente no satisfacer el monto pensional y su retroactivo.

No desconoce esta corporación que el Municipio de Liborina señala que inscribió a Humberto Villa al extinto ISS, para lo cual aportó el formulario de afiliación a los riesgos de IVM el que aparece con fecha de radicación del 29 de febrero de 1996, sin embargo, el diligenciamiento del documento no genera ora el vínculo con la administradora de pensiones, ni traslada los riesgos pensionales, enfatizando que no se demuestra que se hubiere hecho cotización alguna, en tanto Colpensiones en su respuesta y concepto negativo de conciliación afirma que no existe registro de afiliación de Humberto Villa García.

Así las cosas, ocurrido el fallecimiento de Humberto Villa García el 26 de abril de 2004 data en que el Municipio de Liborina no había gestionado la solución del pasivo pensional respecto a este trabajador, corresponde asumir directamente la prestación que se hubiere causado.

En este sentido será revocada la decisión de primera instancia absolviendo a Colpensiones de cualquier condena emitida.

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES

Como premisa inicial y atendiendo a los extremos de vinculación laboral antes referidos se establece que en favor de Humberto Villa García existe un tiempo de servicio que corresponde a 3434 días ó 490.43 semanas, así:

Desde	Hasta	Sub total semanas
22/06/1992	02/09/2001	479.86
03/12/2003	15/02/2004	10.57
Total		490.43
Acumulado en los tres años previos al deceso: 26/04/2001 al 26/04/2004		29
Acumulado antes del 29 de enero de 2003		488
Acumulado en los 6 años previo a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones que para		157.57

este caso corresponde al 30 de junio de 1995 dada la calidad de ente territorial del empleador: 30/06/1989 al 30/06/1995	
Acumulado en los 6 años previos al deceso: 26/04/1998 al 26/04/2004	185.57

Ahora, en lo atinente a la pensión de sobrevivientes, por regla general ha de acudirse a la norma vigente a la fecha del fallecimiento, que ocurrido el 26 de abril de 2004, lo es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, que exige un mínimo de 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores al deceso, requisito que no satisfizo el afiliado pues en tal lapso acumuló 29 semanas

Pese a lo anterior, ha de analizarse la prestación pretendida a la luz del principio constitucional de la condición más beneficiosa (final del artículo 53 Superior), postulado que reconoce la necesidad de protección de los afiliados en los eventos de cambios legislativos, ya que en tratándose de pensiones de invalidez y sobreviviente la Ley 100 de 1993 y sus posteriores modificaciones, no contemplaron regímenes de transición.

Sobre el asunto, la copiosa jurisprudencia de la Corte Constitucional y Sala de Casación Laboral de la CSJ, coinciden al sostener que, ante los cambios legislativos que imponen condiciones más gravosas para el acceso a las pretensiones, corresponde al aplicador del derecho activar tal postulado, protegiendo las expectativas legítimas de los administrados, precisando que en tal condición se hallan quienes tienen una situación jurídica concreta, por haber cumplido con la densidad de cotización que exigía el régimen derogado, pero faltando el acaecimiento de la condición de la invalidez o muerte. (al respecto la sentencia SL 262 de 2020)

Empero las altas corporaciones difieren en la forma de aplicación de tal postulado para efectos de satisfacer la densidad de cotización necesaria para el acceso a la pensión de sobrevivientes, ya que mientras la Sala de Casación Laboral de la CSJ señala que no es posible realizar un ejercicio histórico entre regímenes, restringiendo

el salto normativo a la disposición inmediatamente anterior, además que exige su aplicación para aquellos afiliados que hubieran satisfecho la densidad de cotización para la data en que se produjo el cambio de legislación. (al respecto la sentencia SL 836 de 2023)

De forma paralela, la Corte Constitucional, efectuando un análisis del asunto de cara a valores fundantes del Estado Constitucional como la garantía a la seguridad social que propenden por amparar al beneficiario del riesgo de desaparición del ingreso del cotizante, sustituyendo este emolumento por el provisto por la pensión, desde la sentencia SU 005 de 2018 unificó los criterios de aplicación de tal principio respecto de la pensión de sobreviviente, indicando que éste no solo se satisface cuando se aplica la norma inmediatamente anterior a la vigente, sino que se extiende a todo esquema normativo anterior bajo cuyo amparo el afiliado haya contraído una expectativa legítima.

En tal línea argumentativa, explicó que es posible conceder efectos ultractivos a las disposiciones del Decreto 758 de 1990 o normas anteriores cuando el fallecimiento del cotizante hubiera ocurrido en vigencia de las reformas introducidas por la Ley 797 de 2003, siempre que se proteja a una persona vulnerable, las que identifica para efectos de reconocer la pensión en sede constitucional, a través de la aplicación de un test de procedibilidad que identifica la necesidad del amparo constitucional por afectación cierta al mínimo vital de una persona de especial protección constitucional, la condición de dependencia económica del reclamante respecto al afiliado fallecido, la imposibilidad del cotizante de haber acopiado la densidad de aportes y la proactividad en el ejercicio de la reclamación. Al respecto indicó la sentencia SU 005 de 2018:

“Para la Sala Plena, solo respecto de las personas vulnerables resulta proporcionado interpretar el principio de la condición más beneficiosa en el sentido de aplicar, de manera ultractiva, las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 –o regímenes anteriores- en cuanto al requisito de las semanas de cotización, para efectos de valorar el otorgamiento de dicha prestación económica, aunque la condición de la muerte del afiliado hubiese acaecido en vigencia de la Ley 797 de 2003. Si bien estas personas vulnerables no adquirieron el derecho a la pensión de sobrevivientes en vigencia del Acuerdo

049 de 1990 –u otro anterior-, los aportes del afiliado, bajo dicho régimen, dieron lugar a una expectativa que, por las circunstancias particulares del tutelante (esto es, su situación de vulnerabilidad, al haber superado el Test de Procedencia descrito en el numeral 3 supra), amerita protección constitucional. Para estas personas, las sentencias de tutela deben tener un efecto declarativo del derecho y, en consecuencia, solo es posible ordenar el pago de mesadas pensionales a partir de la presentación de la acción de tutela. En este sentido, con fines de unificación, se ajusta la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia”.

Con estos contornos y de cara al precedente de la Corte Constitucional se concluye que Humberto Villa García al momento de su fallecimiento había causado la pensión para sus eventuales beneficiarios, toda vez que para el momento del cambio normativo entre el Decreto 758 de 1990 y la Ley 100 de 1993, esto es el 30 de junio de 1995 dada la condición de ente territorial del Municipio de Liborina, acopiaba el tiempo de servicio mínimo para el acceso de tal prestación.

Para efectos de contabilizar la densidad de cotización/tiempo de servicio, necesaria para causar la pensión bajo la égida del Decreto 758 de 1990 acude esta corporación a las sub-reglas vertidas en sentencia de la CSJ SL 680 de 2023 (que a su vez se remite a las consideraciones de la sentencia SL 1663 de 2021) que exige:

- a)** 300 semanas, en cualquier época, antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 ó,
- b)** 150 semanas en los 6 años previos a la vigencia del sistema general de pensiones (que para este caso se contabilizan a partir del 30 de junio de 1995) e igual densidad de cotización en los 6 años anteriores al fallecimiento.

Condiciones que satisfizo el finado Villa García toda vez que en los 6 años previos al 30 de junio de 1995 acopiaba un tiempo de servicio que se traduce en 157.57 semanas de cotización y entre el 26 de abril de 1998 y el mismo día y mes del año 2004 (6 años previos al deceso) prestó servicios por un lapso que se traduce en 185,87.

Adicional, pese a que esta ponente considera que para efectos de la aplicación del postulado de la condición más beneficiosas en sede de un proceso ordinario laboral no es menester verificar la satisfacción del predicado test de procedibilidad incorporado en la sentencia SU 005 de 2018, si en gracia de discusión se valorara su cumplimiento en sede ordinaria, este se satisface íntegramente, así:

Condiciones	Análisis en el caso concreto	cumple
<i>Pertenecer a un grupo de especial protección constitucional o encontrarse en uno o varios supuestos de riesgo</i>	Pertenece al grupo de especial protección constitucional de la tercera edad en tanto cuenta con 73 años de edad (según se informa en el formulario de pág 113).	Si
<i>Afectación directa de la satisfacción de necesidades básicas, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas por la carencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes</i>	Ana Delia García no es pensionada, ni cuenta con una actividad económica estable que le permita proveer para sí los ingresos que garanticen su subsistencia, así declararon los testigos al informar que la accionante nunca ha ejercido una actividad económica, siempre ha sido ama de casa, que no cuenta con recursos propios para procurar su subsistencia.	Si
<i>Dependencia económica del causante antes del fallecimiento de este, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso</i>	Relataron los testigos Olga Rubiela, Alba Mery y Fabio Nelson Villa García que Humberto Villa era el único encargado de la satisfacción de las necesidades de su esposa.	Si
<i>Circunstancias de imposibilidad de cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones del causante</i>	Narraron los testigos que Humberto Villa en sus últimos 4 meses de vida experimentó quebrantos de salud: estuvo hospitalizado, se le ordenó la práctica de una cirugía coronaria, pero falleció previa a esta. En adición se valoran las posibilidades de integración al mercado laboral del señor Villa García, quien ejercía el oficio de aseo en un corregimiento de Liborina y cuya labor entre los años 2001 a 2003 al parecer se delegó en la junta de acción comunal, condición que no fue discutida en este trámite, pero que revela una sistemática violación en los derechos laborales del señor Villa García.	Si
<i>El accionante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes</i>	La demandante el 22 de junio de 2004 a escasos meses de ocurrido el deceso de su esposo requirió a la administración municipal para la satisfacción de los derechos laborales y pensionales (pág 45)	Si

Así las cosas, Humberto Villa García a su fallecimiento dejó causada la pensión de sobrevivientes, siendo beneficiaria de esta su esposa Ana Delia García de Villa, no solo en razón al vínculo marital formalizado el 30 de enero de 1971 que se probó con el certificado de registro civil de matrimonio (pág. 29), pero además por la demostración de la existencia de una unidad familiar desde tal data hasta el deceso, esto es por más de 33 años, donde los cónyuges conformaron una familia de 5 hijos, siendo Humberto quien se ocupó de proveer los recursos económicos para el sostenimiento del hogar, mientras que Ana Delia veló por el bienestar de los hijos y su esposo, unidad que solo se rompió con la muerte de Humberto de Jesús en tanto no se presentaron separaciones, condiciones que expresaron al unísono los testigos Olga Rubiela, Alba Mery y Fabio Nelson Villa García.

Así las cosas, causada la pensión de sobrevivientes por cumplimiento de las premisas legales y demostrada la condición de beneficiaria de Ana Delia García, corresponde al empleador omiso asumir su reconocimiento, prestación que siguiendo las reglas del artículo 48 de la Ley 100 de 1993 y atendiendo a los rangos salariales certificados por el Municipio accionado (pág. 37) asciende a 1 SMLMV, pues pese a informarse salarios ligeramente superiores al mínimo, al computarse para componer el IBL (artículo 21 Ley 100 de 1993) y aplicarle una tasa de reemplazo del 45% arrojaría una mesada en inferior cuantía a la mínima legal.

Mesada que se causa de forma concomitante con la muerte del trabajador, empero dados los efectos de la prescripción extintiva solo habrán de reconocerse las mesadas causadas con posterioridad al 26 de junio 2015, esto es 3 años previos a la presentación de la acción judicial, siendo este el hito de interrupción del fenómeno extintivo por cuanto la previa reclamación elevada el 22 de junio de 2004 a la que se dio respuesta en misiva del 21 de diciembre de 2005 (pág. 41/45) no se siguió de la oportuna presentación de la acción judicial. Así, solo con la presentación de aquella se generó la interrupción, declarando probada parcialmente la excepción de prescripción.

Calculada la prestación desde el 26 de junio de 2015 y extendida hasta el 30 de abril de 2013 en cuantía de 1 SMLMV, a razón de 14 mesadas anuales dada su consolidación previa al acto legislativo 01 de 2005 se genera un retroactivo de **\$90.863.767**, suma de la cual podrán efectuarse los descuentos para solventar los aportes al sistema de salud.

Año	Valor mesada	Nº mesadas	Sub total
2015	\$ 644.350	7,3	\$ 4.703.755
2016	\$ 689.454	14	\$ 9.652.356
2017	\$ 737.717	14	\$ 10.328.038
2018	\$ 781.242	14	\$ 10.937.388
2019	\$ 828.116	14	\$ 11.593.624
2020	\$ 877.803	14	\$ 12.289.242
2021	\$ 908.526	14	\$ 12.719.364
2022	\$ 1.000.000	14	\$ 14.000.000
2023	\$ 1.160.000	4	\$ 4.640.000
TOTAL			\$ 90.863.767

A partir del 1° de mayo de 2023 el Municipio de Liborina seguirá cancelando a Ana Delia García la pensión de sobrevivientes en cuantía de 1 SMLMV a razón de 14 mesadas anuales.

No habrá lugar al reconocimiento de intereses de mora toda vez que la pensión que se declara lo es en aplicación de reglas jurisprudenciales, lo que atenúa el rigor de la imposición de los mismos (SL 3808 de 2020) en subsidio y para compensar los efectos de la pérdida del poder adquisitivo del dinero se ordena la indexación de las sumas adeudadas por retroactivo pensional.

Resta por indicar que la condena en costas en ambas instancias está a cargo del Municipio accionado. En esta se tasan las agencias en derecho en la suma de 2 SMLMV.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL, **se confirman los numerales 1 y 2 de la**

sentencia, REVOCANDO los numerales 3 a 7 de la sentencia de primera instancia, en su lugar dispone:

Dada la falta de afiliación al sistema pensional y cotización que permitiera la subrogación de los riesgos, corresponde al Municipio de Liborina asumir la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de Humberto de Jesús Villa García, la que se genera por aplicación de las reglas del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, en virtud del principio de la condición más beneficiosa.

Corresponde al Municipio de Liborina reconocer a Ana Delia García de Villa la pensión de sobrevivientes, causada en cuantía de 1 SMLMV a razón de 14 mesadas anuales. Cuantificado el retroactivo pensional causados desde el 26 de junio de 2015 y extendido hasta el 30 de abril de 2023 asciende a \$90'863.767, suma que se pagará con la debida indexación, de la cual podrán efectuarse los descuentos para solventar los aportes al sistema de salud.

A partir del 1° de mayo de 2023 el Municipio de Liborina seguirá reconociendo a Ana Delia García la pensión de sobrevivientes vitalicia a razón de 1 SMLMV por 14 mesadas anuales.

Se declara la prosperidad parcial de la excepción de prescripción. Se absuelve a Colpensiones de todas las súplicas.

Costas en ambas instancias está a cargo del Municipio accionado. En esta se tasan las agencias en derecho en la suma de 2 SMLMV.

Lo resuelto se notifica a las partes por Edicto. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

Las Magistradas,


LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE

MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA
Sin firma por ausencia justificada.


ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

Radicado: 05001 31 05-005-2019-00198-01
Demandante: ANA DELIA GARCÍA DE VILLA
Demandado: COLPENSIONES y MUNICIPIO DE LIBORINA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA
Decisión: **CONFIRMA y MODIFICA**

Magistrada ponente LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado hoy 16 de mayo de 2023 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 idíbem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO